

Concepción, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO:

1º. Que, mediante sentencia definitiva de 21 de noviembre de 2018, se resolvió rechazar, en todas sus partes, sin costas, la demanda de reivindicación intentada por Eliana Oyarce Arriagada, Flor María Oyarce Arriagada y Jaime Luis Ramos Oyarce, en contra de Ana Aurora Mendoza Briones.

Contra la referida sentencia, se ha alzado el apoderado de la actora, deduciendo recurso de casación en la forma fundado en las causales previstas en los numerales 5 y 9 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Conjuntamente con el referido recurso, se ha interpuesto recurso de apelación, pidiéndose la enmienda conforme a Derecho de la resolución impugnada, su revocación, y en su lugar se resuelva acoger la demanda de autos en todas sus partes, con costas.

Se dispuso traer los autos en relación para conocer, tanto del recurso de casación en la forma como de la apelación deducidos por el apoderado de la parte demandante.

I. En cuanto al recurso de casación en la forma:

2º. Que el primer motivo de casación formal invocado por el apoderado de la parte demandante corresponde al contenido en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, “5a. En haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170”, todo ello en relación con el artículo 170 número 4 del mismo Código, que obliga a los sentenciadores a señalar las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, y con ello, la de valorar toda la prueba rendida conforme a derecho.

Fundamentando la causal, indica que la jurisprudencia ha señalado que se está frente a una omisión del requisito del No 4 de artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, cuando hay ausencia de fundamento tanto cuando éste se encuentra ausente, como cuando



la ausencia es parcial o son insuficientes los expresados, al igual que al existir incoherencia interna, arbitrariedad e irrazonabilidad.”.

Señala que los hechos afirmados por la jueza *a quo* en el considerando séptimo no encuentran su sustento en el mérito del proceso y están en abierta contradicción con lo referido en su propio fallo en el considerando tercero al referirse a la prueba testimonial ya que el primero de los testigos señala que “le consta al testigo porque ha visto que intentan restablecer su terreno pero no los dejan, lo han intentado varias veces” y el segundo de ellos porque “doña Eliana me lo ha comentado, que ha conversado con doña Ana Mendoza pero no le quiere entregar.”

Luego, en su concepto, existe una incoherencia interna, arbitrariedad e irrazonabilidad, en los argumentos de rechazo de la sentencia que al no encontrar sustento en el mérito de autos ni en el tenor del propio fallo, que hacen que exista una ausencia de fundamentos de hecho y derecho en el fallo impugnado;

3º. Que el recurso deberá ser desestimado por la causal que se invoca porque la contradicción que el recurrente denuncia no es tal, dado que no existe contraposición en los hechos establecidos por el tribunal, dado que éste, para desestimar la demanda, consideró que la prueba testimonial rendida por el actor para probar la posesión por parte de la demandada del retazo que se reivindica, fue insuficiente porque los testigos presentados no dieron razón de sus dichos, es decir, no indican cómo tomaron conocimiento de lo que declaran, motivo por el cual su testimonio carece de eficacia probatoria en juicio;

4º. Que, el segundo motivo de casación formal, lo hace consistir el recurrente en la causal prevista en el artículo 768 N° 9 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad, todo ello en relación con la prueba de inspección personal del tribunal, por haberse cometido un error en los hechos constatados al señalar que



a la diligencia no concurrió tampoco la demandada, sino sólo su abogado;

5°. Que, recurrente señala que la inspección personal se llevó a efecto el día 22 de junio del 2018 y que el acta se subió al expediente digital el día 09 de agosto del 2018, esto es casi un mes y medio desde la diligencia y 10 días después de citadas las partes a oír sentencia y que el error que se denuncia es que se concluye que dicha diligencia nada aporta, desde que a ella no concurre tampoco la demandada, solo su abogado, cuestión que no es verdad;

6°. Que, de conformidad a lo prevenido en el artículo 768 inciso 3° del Código de Procedimiento Civil, la casación podrá desestimarse, si de los antecedentes aparece de manifiesto que la parte no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del mismo, cuyo es el caso de autos, dado que no se advierte ni tampoco indica el recurrente, la forma en que hubiera influido en lo dispositivo del fallo la presencia o no de la litigante en una diligencia de inspección personal del tribunal, máxime cuando la referida diligencia tiene eficacia probatoria únicamente en lo que concierne a las circunstancias o hechos materiales consignados en el acta, como resultado de la propia observación del tribunal.

Por lo recién expuesto cabe concluir que el recurso de casación en la forma intentado debe ser rechazado en todos sus extremos.

II.- En cuanto al recurso de apelación:

Se reproduce la resolución en alzada y se tiene, además, presente:

7°. Que, tratándose de una demanda de reivindicación en que se pide declarar, a favor de la demandante el derecho de dominio que le asiste sobre un inmueble, ha debido establecerse en el proceso lo siguiente: a) Que se trate de una cosa susceptible de ser reivindicada; b) Que el reivindicante es propietario de ella y c) Que la posesión de



dicha cosa la detenta el demandado;

8º. Que la prueba aportada por la parte demandante resultó completamente inidónea para acreditar en el proceso dicha circunstancia, no satisfaciendo la carga probatoria que, de acuerdo a las reglas generales, pesaba sobre quien accionaba.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y lo dispuesto en los artículos 144, 186 y 768 y siguientes del Código de procedimiento Civil, se declara:

I. Que se rechaza, sin costas, el recurso de casación en la forma interpuesto en contra de la sentencia definitiva de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho;

II. Que se confirma en lo apelado y sin costas del recurso, la referida resolución.

Regístrese y devuélvase.

Concepción, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.

Visto:

Se han elevado estos antecedentes RUC 17-4-0073385-6 y RIT T-75-2017 provenientes del Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles, para conocer del recurso de nulidad deducido por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia definitiva de 8 de febrero de 2019 que rechazó en todas sus partes la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales y la de despido indebido, deducidas por don Álvaro Yáñez Martínez, en contra de CMPC Maderas S.A.; acogió parcialmente la de cobro de prestaciones, ordenando pagar al actor la suma de \$2.660.343, por concepto de feriado legal, más los reajustes e intereses correspondientes y resolvió no condenar en costas al demandante por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

El recurso aparece fundado en las causales previstas en el artículo 477 y 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, por haberse dictado la sentencia con infracción de ley que influyó sustancialmente



en lo dispositivo del fallo y por haber sido pronunciada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, causales que se articulan en forma conjunta.

Pide la invalidación de la sentencia impugnada y la dictación de la sentencia de reemplazo en la cual declare que se acoge la denuncia por vulneración de derechos fundamentales haciendo lugar a todas las prestaciones solicitadas en la denuncia de autos, o, en su defecto, declare el despido como injustificado, haciendo lugar a las prestaciones reclamadas en la demanda subsidiaria de autos.

Con fecha 16 de mayo del año en curso se procedió a la vista del recurso, efectuándose los alegatos por la apoderada de la parte demandante y el mandatario de la demandada, según se consigna en el acta de audiencia.

Con lo relacionado y considerando:

I. Sobre la alegación previa de improcedencia del recurso:

1º. Que, en la audiencia fijada para vista del recurso el apoderado de la parte recurrida ha solicitado la declaración de admisibilidad del recurso, fundado en que la sentencia impugnada recae sobre un juicio que fue previamente anulado por esta Corte, por sentencia de 10 de septiembre de 2018, dictada en autos rol 362-2018 del Ingreso Laboral. Por lo anterior, entiende que, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del artículo 482 del Código del Trabajo, la sentencia definitiva actualmente recurrida de nulidad no es susceptible de dicho recurso;

2º. Que, de conformidad a lo señalado en el inciso final del artículo 482 del Código del Trabajo “No procederá recurso alguno en contra de la resolución que falle un recurso de nulidad. Tampoco, en contra de la sentencia que se dictare en el nuevo juicio realizado como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de nulidad”;



3°. Que la situación de este proceso no se ajusta a la hipótesis normativa contenida en el inciso final del artículo 482 del citado Código pues, la sentencia pronunciada por esta Corte, de 10 de septiembre 2018, no entró a pronunciarse sobre el recurso de nulidad interpuesto en su oportunidad, sino que, aplicando las disposiciones rectoras de la nulidad procesal, resolvió anular la sentencia primigenia y todo lo obrado en la audiencia de juicio, ordenando la retroacción del proceso al estado de que el juez no inhabilitado conozca del procedimiento, llevando a cabo una nueva audiencia de juicio oral y continuara la con la tramitación de la causa hasta su conclusión, consignándose en su motivación 7ª “...resultando por ello innecesario emitir pronunciamiento respecto de los recursos de nulidad interpuestos por las partes en este procedimiento”;

4°. Que, en concepto de estos sentenciadores, es ésta la interpretación más ajustada al derecho de acceso al recurso, que forma parte de la garantía del derecho a una tutela judicial efectiva, la que exige interpretar restrictivamente y en forma favorable a la efectividad del señalado derecho, las normas que limiten o restrinjan la facultad de impugnar resoluciones judiciales.

Así las cosas, la alegación de improcedencia del recurso, no podrá prosperar, sin perjuicio de que, además, esta Corte mediante resolución firme de 13 de marzo de 2019, resolvió declararlo admisible;

II. En cuanto al fondo del recurso de nulidad:

5°. Que a través de la primera causal de invalidación invocada, esto es, la señalada en el artículo 477 se denuncia la vulneración del artículo 160 N° 7 del Código del trabajo.

Fundamentando la causa, expresa que el fallo nada dice acerca de cuál sería la obligación contractual que se infringe, ni se analiza pormenorizadamente si en la especie concurren los elementos suficientes para entender configurada la causal de caducidad del contrato contemplada en el artículo 160 n° 7 del Código del Trabajo.



Añade que la causal en referencia exige para su procedencia la concurrencia de tres requisitos copulativos: a.- Incumplimiento de alguna obligación contractual. b.-Incumplimiento sea Grave. c.- Que la causal sea invocada y comunicada de manera oportuna.

Hace presente que, en lo que se refiere al incumplimiento de alguna obligación contractual, no cualquier incumplimiento puede ser apto para poner término al contrato de trabajo, sino que es preciso que el incumplimiento se de respecto de alguna obligación establecida en el respectivo contrato de trabajo, agregando que la conducta que sirve de fundamento al despido, no vulnera ni transgrede las disposiciones normativas señaladas por el demandado y que no fue consagrada la obligación de declarar un conflicto de interés en ningún documento suscrito por ambas partes del contrato por lo que concluye que se trata de una obligación establecida unilateralmente por el empleador, razón y motivo suficiente para entender que carece esta directriz del carácter de obligación contractual.

Añade que ha quedado acreditado en autos que, si alguna relación comercial tuvo su representado no fue con su empleador, ejerciendo una actividad completamente lícita, amparada por el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República y que también quedó sentado que, no obstante ser el sub gerente de la planta, atendido los mecanismos de protección que posee la empleadora, en la relación comercial con el tercero, no se ha valido de antecedentes que haya conocido en razón de sus funciones.

Asevera que el eventual incumplimiento obligacional que se le imputa no tiene origen contractual alguno, por lo que no se da el primer supuesto contenido por la norma del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es que se trate del incumplimiento de alguna obligación impuesta en el contrato.

Con respecto al requisito de que el incumplimiento debe ser grave, señala que no cualquier incumplimiento contractual autoriza al empleador para poner término al contrato de trabajo y que para



calificar la gravedad deben considerarse aspectos tales como la antigüedad del trabajador, el desempeño de éste a lo largo de la relación laboral, el daño ocasionado a la empleadora con dicho incumplimiento, entre otras, y que en autos quedó acreditado que el actor trabajó por mas de 20 años para la empleadora y que su desempeño fue de excelencia, prácticamente intachable.

Indica que ningún daño material se ocasionó a la empleadora con el ejercicio de la actividad del transporte que se le imputa al denunciante, los números de la empresa siempre fueron buenos, destacándose por sobre otras plantas que posee CMPC Maderas.

Finalmente, observa que la aplicación de la causal que se invoca para poner término al contrato de trabajo, debe ser coetánea al despido y que en autos consta que en agosto se efectuó una investigación, que su representado participaba en un proceso de negociación colectiva, que fue despedido apenas concluyó esta negociación, todo lo cual le lleva a concluir que la comunicación del despido es extemporánea, y que por ende el despido ha sido injustificado.

Sostiene que la infracción normativa expuesta ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que de haberse aplicado correctamente, necesariamente se habría concluido que las obligaciones cuya infracción se imputa a su representado no tienen el carácter de contractual, toda vez que no se han acordado por las partes, que tampoco está revestido ese eventual incumplimiento de la gravedad que exige la norma y que en atención a la forma en que este ocurrió, lesiona su derecho fundamental a la honra, debiendo acogerse la denuncia de tutela laboral, o a lo menos la pretensión subsidiaria de despido injustificado también ejercida por esta parte en tiempo y forma;

6º. Que, como cuestión previa, respecto del primer motivo de nulidad que se invoca, debe señalarse que la alegación de esta causal supone la aceptación de los hechos tal como han sido asentados en la



sentencia pues la causal dice relación única y exclusivamente con la infracción de ley sustantiva lo que desde luego importa sustraerse de cualquier cuestión que diga relación con aspectos fácticos, ya que la errónea o falsa aplicación de la ley implica dejar inalterables los hechos fijados por el juez de la instancia; se trata, así, de un motivo que se reduce a la *questio juris* y que nada tiene que ver con la denominada *questio facti*.

Por consiguiente, el juicio sobre los hechos no es censurable por la vía de esta causal, toda vez que la causal esgrimida supone que una vez establecidos los hechos el tribunal en el momento de dictar sentencia aplique erróneamente el derecho, ya sea aplicando la ley a una situación en la que no correspondía aplicarla; la falta de aplicación de la ley a una situación en que debía ser aplicada o la errónea aplicación o interpretación de la ley;

7°. Que, así las cosas, la sentencia contra la cual se recurre ha establecido como hechos del proceso y, por consiguiente, invariables de cara al recurso por la causal interpuesta, los siguientes:

a) Que el despido del actor lo fue porque existía un conflicto de interés por parte del actor y nunca informó tal declaración de conflicto de interés a su empleador como lo exigía la reglamentación interna de la empresa;

b) Que el actor era propietario de cinco camiones que en su momento transportaron hacia la Planta Remanufactura Los Ángeles insumos adquiridos de un tercero, situación que generó una evidente situación de conflicto de interés, por el alto cargo de confianza que tenía en la planta;

c) Que el actor no declaró la situación de conflicto de interés, debiendo hacerlo;

d) Que el actor conocía el Código de Ética de la empresa y su reglamento interno, que se le había efectuado capacitación y cuestionarios e-learning sobre la materia de conflictos de interés y, a



pesar de ello, declaró con fecha 7 de junio de 2017, no tener conflicto de interés;

e) Que desde el mes de agosto de 2015, el actor tenía conocimiento de que en caso de identificar una eventual situación de conflicto de interés que le afecte con contratantes o potenciales contratantes terceros de CMPC debía informarlo y por escrito a su superior jerárquico;

8º. Que, sobre la bases de los hechos acreditados, la sentenciadora del a quo concluyó en su motivación décimo cuarta que “nos encontramos en una situación clara de conflicto de intereses por parte del actor, teniendo especialmente presente el cargo que ejercía de Sub Gerente de la Planta de Remanufacturas de Los Ángeles, por lo que estaba en la situación privilegiada respecto al conocimiento, experiencia y manejo de todos los procedimientos, y las tomas de decisiones de la planta, y en ese contexto, contraviniendo las políticas internas de la empresa en la materia, que eran de su conocimiento igualmente, utilizó camiones de su propiedad para el traslado de insumos a la planta a su cargo, provenientes de la empresa Promaest, tercero prestador de servicios, acreditado con el contrato que se acompañó al efecto”;

9º. Que estos sentenciadores comparten las conclusiones contenidas en la sentencia que se impugna, toda vez que el comportamiento del actor pugna con los deberes de rectitud y honradez que deben presidir la conducta de quien presta servicios remunerados bajo subordinación o dependencia, sin que revista mayor trascendencia la circunstancia de estar o no contenida en el contrato de trabajo, toda vez que el contrato de trabajo está marcado por un contenido ético, es decir, por el imperio de ciertos principios que las partes deben respetar, entre ellos, el deber de fidelidad y lealtad a que ambas se encuentran obligadas, atendidas, entre otras, las circunstancias de alta competitividad en el que se desarrollan en el



mundo moderno las actividades empresariales, especialmente en el rubro de servicios en que los trabajadores juegan un rol principal.

Por lo mismo, las relaciones laborales han de desenvolverse en un clima de confianza, el que se genera en la medida que las partes cumplan con sus obligaciones en la forma estipulada, fundamentalmente, de buena fe, principio del cual se encuentra imbuido toda nuestra legislación y consagrado, especialmente en materia contractual, en el artículo 1546 del Código Civil;

10°. Que, de esta manera, los mencionados deberes de solidaridad y colaboración, integrantes de la carga ética aludida, son claras directrices del comportamiento de los contratantes durante la vigencia de su vinculación, sujetándolos a varios deberes que, aunque no hayan sido explicitados en el texto del contrato pertinente o consensuados expresamente, emanan de la naturaleza de la relación laboral, por ejemplo, que ninguna de las partes actuará en perjuicio o detrimento de la otra o el buen trato que deben prodigarse los trabajadores entre sí;

11°. Que, por consiguiente y con el sustrato fáctico descrito precedentemente, al entender el juez de la causa como justificado el despido no ha resultado infringido lo dispuesto en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, sino que, por el contrario, no hizo sino dar una correcta interpretación a la disposición antes referida;

12°. Que el segundo motivo de nulidad invocado se hace consistir en la circunstancia de que en la dictación de la sentencia impugnada el juez del grado habría incurrido en vicios que configuran causal contemplada en artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, el haber sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Refiere que el artículo 456 del Código del trabajo, establece que el tribunal apreciara la prueba conforme a la sana crítica, debiendo expresar las razones jurídicas y las simplemente lógica, científicas,



técnicas o de experiencia en cuya virtud les asigne valor o las desestime y que el precepto en cuestión agrega que se tomará especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Afirma que los presupuestos técnicos y legales referidos y contenidos en este sistema de valorización de la prueba no se han cumplido por el tribunal de la instancia al emitir su pronunciamiento jurisdiccional.

Invoca, como primer error que contribuye y configura este vicio, lo constituye el hecho de que la sentencia impugnada no efectúa un análisis completo de la prueba rendida por ambas partes, limitándose únicamente a enumerar y nombrar la prueba que cada parte rindió, sin hacerse cargo además de los motivos por los que prefirió una prueba en desmedro de la otra, ni la forma o prueba por la que concluye que la acción o conducta del actor ha sido indebida, configurando la causal invocada por el empleador para poner término a su contrato de trabajo.

Agrega que, si el sentenciador hubiera respetado las normas de experiencia y técnicas propias de la sana crítica debió necesariamente, haber efectuado en primer término un análisis pormenorizado de la carta de despido, manifestando y precisando con claridad cuál fue el hecho imputado para poner término al contrato de trabajo y si en la comunicación se efectúa una exposición clara y precisa de los hechos que se invocan.

Luego de transcribir los considerandos décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto, sostiene que surge un primer error del sentenciador afectando las normas de la lógica, ya que para haber concluido lo referido debió previamente haber partido de la base de cuál es el concepto de conflicto de interés de acuerdo a lo dispuesto



por el propio empleador, y luego a partir de ese concepto, establecer si en la especie afectó o no a su representado un conflicto de interés.

Afirma que la sentenciadora entendió que existía un conflicto de interés, suponiendo que su representada se encontraba en una posición privilegiada, por el conocimiento, experiencia y manejo de todos los procedimientos y las tomas de decisiones de la planta, apartándose de la prueba de cargo rendida, de la cual se podía establecer, que en este sentido su representado ninguna posición de privilegio tenía, ya que no le correspondía tomar decisiones en la planta, tendientes a adquirir un determinado producto, ni manipular los sistemas de adquisición con los que contaba la planta, alegando que el actor, no obstante ser el subgerente de la planta de remanufactura, no estuvo en condiciones de influir en las decisiones de negocio de su empleadora.

Reprocha de la sentencia un análisis probatorio indebido e incompleto, sin relación al concepto de conflicto de interés que el propio demandado elaboró, lo que explica el yerro en el fallo, que lleva a entender el despido como justificado, estimando que un debido análisis de la prueba de cargo, declaraciones de testigos y documental específicamente, permiten establecer de manera irrefutable, que todas las decisiones relativas a la compra de insumos y productos de la empresa, no pasaban por el subgerente de planta, sino que por departamentos diversos, lo que posibilitan concluir que el trabajador en el ejercicio de su cargo no se encontraba en condiciones de influir en decisión de negocio alguna, ni en la supervisión de algún trabajo.

Manifiesta que la infracción manifiesta a las normas sobre apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues no consideró ni efectuó el análisis adecuado de toda la prueba rendida, sin tomar en cuenta de manera completa las declaraciones vertidas por los testigos que depusieron en juicio, ni efectuar un debido análisis de la prueba documental acompañada en autos, apreciando deficientemente la prueba rendida, lo que permitió establecer una conclusión errónea,



respecto a entender acreditado un hecho inexistente como lo es la existencia de un conflicto de interés.

Expone que, de haber considerado la documentación elaborada por la propia denunciada, los dichos de sus propios testigos, debió haber entendido que no se dan los elementos para configurar un conflicto de interés, y que por ende no existe ninguna obligación de declarar conflicto alguno, razonamiento que hubiera llevado necesariamente a entender que el despido fue indebido, y que atendida las circunstancias en que se efectuó, la gravedad de la conducta imputada, se lesiona un derecho fundamental de mi representada, debiendo acogerse la denuncia de tutela laboral o en el peor de los casos se declarara que el despido es injustificado;

13°. Que, del atento examen de la sentencia, no se advierte en ella que en el establecimiento de los hechos exista un quebrantamiento del deber de exteriorizar el proceso racional que exige el artículo 456 del Código del Trabajo en orden a expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne a las pruebas rendidas valor o las desestime y mucho menos se puede afirmar que haya un apartamiento manifiesto, esto es, de manera patente, palmaria u ostensible, de las reglas de valoración probatoria;

14°. Que, en efecto, contrariamente a lo sostenido en el recurso, de los fundamentos del fallo objetado, particularmente desde sus considerandos undécimo en adelante, aparece que la juez del a quo se hizo cargo de la prueba incorporada en la audiencia de juicio, la analizó sin exorbitar los límites legales y llegó a su conclusión exponiendo las razones pertinentes mediante un procedimiento lógico que permite la reproducción del razonamiento utilizado al efecto, lo que implica que cumplió con los parámetros formales del mencionado artículo 456;

15°. Que, de otra parte, se observa que el recurrente no cuidó de explicar en su recurso cómo o en qué forma la sentenciadora del a quo



habría vulnerado las normas de la sana crítica, vale decir, cuál o cuáles leyes de la lógica formal (identidad, no contradicción, tercero excluido o razón suficiente) fueron traspasadas o infringidas en el discurso valorativo utilizado por el tribunal del mérito para arribar a su conclusión definitiva, como tampoco las máximas de experiencia o conocimientos científicos o técnicos supuestamente vulneradas en ese mismo discurso;

16°. Que la impugnación de la sentencia se justifica a través de una examen parcial de las pruebas aportadas al juicio, a partir de las cuales el recurrente formula sus particulares conclusiones, pretiriendo el mérito de la prueba testifical y documental valorada por el tribunal y sin expresar de ningún modo en qué forma se habrían vulnerado las reglas de la sana crítica en el proceso de valoración de la prueba rendida en el juicio, específicamente su ajuste a la regla de la lógica que el recurrente echa en falta, limitándose a aseverar que no se efectuó un análisis completo de la prueba rendida por ambas partes, cuestión que de ser cierta -que no lo es- sería constitutiva de un motivo diferente del invocado;

17°. Que, como puede advertirse, el reproche que reiteradamente formula el recurrente lo es a las conclusiones fácticas y a la valoración de los medios de prueba que efectuó el juez a quo, que no coincide con la que esperaba para que prosperara su pretensión, pero no ha justificado la vulneración de normas que regulen estas actividades de valoración de la prueba, lo que es esencial para que pueda prosperar su pretensión impugnativa.

Por estos fundamentos y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 474, 477, 478 letra b) y 482 del Código del Trabajo, desestimándose la alegación de improcedencia del recurso de nulidad, se rechaza, sin costas, el interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia definitiva de ocho de febrero de dos mil diecinueve, proveniente del Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles.



Regístrese y comuníquese.

Redactó Gonzalo Cortez Matcovich, abogado integrante, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Civil Rol N° 2690-2018.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministra Matilde Esquerre P. y Fiscal Judicial Hernan Amador Rodriguez C. Concepcion, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.

En Concepcion, a veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

